

A finales de octubre de 2022, Rishi Sunak, de origen indio, se convirtió contra todo pronóstico en primer ministro del Reino Unido. Aquí llegó después de que el Rey Carlos III le encargara formar un nuevo gobierno, hecho que tuvo como antesala el que el Partido Conservador lo ungiera como su máximo líder. Su llegada al número 10 de Downing Street significaba suplir en el cargo a Liz Truss, quien sería a su vez la que sustituyó a principio de septiembre a Boris Johnson. De este modo, Sunak puso fin a una crisis política que había ocasionado que en algo más de tres años este cargo hubiese tenido tres primeros ministros. Ya posesionado como jefe de gobierno, Sunak, ex ministro de finanzas de Johnson, manifestó que su propósito era unir al país no con palabras y si con hecho. En orden de prioridades definió mejorar el crecimiento económico, reducir la inflación, atender la situación social de los más desfavorecidos y, por supuesto, atacar la migración ilegal.

En un momento de crisis como el que vive el Reino Unido es obvio que el primer ministro Sunak, como ya lo hicieron Truss, Boris Jonhson, Theresa May, David Cameron, Gordon Brown y antes Tony Blair, se diera a la tarea de promover un clima adverso y hostil contra la migración y quienes representan a la población solicitante de asilo y refugio. Es de recordar que el rechazo a estos dos sectores fue una de las razones que llevó a que el 51.9% de los votantes optará porque se impusiera la salida del Reino Unido de la Unión Europea, hecho que se consumó con el referéndum sobre el Brexit —el 26 de junio de 2016— y se materializó con el retiro definitivo el 31 de diciembre de 2020. Durante la etapa previa a la consulta se escuchó que una de las razones de porqué debía irse el Reino Unido de la UE se debía a que la migración estaba acabando con la seguridad social y era un factor que promovía la inseguridad y la delincuencia. Para entonces se calculaba que más de 100 mil personas habían cruzado el Canal de la Mancha de forma irregular en improvisadas embarcaciones y se encontraban como solicitantes de asilo o como migrantes económicos en Londres y otras ciudades.

Es claro que, para el partido conservador y sectores afines ideológica y políticamente, el UKIP, por ejemplo, hay que preservar una identidad británica única, esencializada, islamófoba y en abierta oposición al multiculturalismo. Con este fermento, desde hacía mucho tiempo diversas organizaciones del espectro de la derecha y la ultraderecha británica venían

insistiendo que debía existir una ley que le permitiera al gobierno expulsar a migrantes y solicitantes de asilo que no pudieran regularizar por distintos motivos su situación. Si requerían de un instrumento de esta naturaleza, el pasado 23 de abril lo han logrado como quiera que el parlamento británico aprobó el polémico proyecto de ley que autoriza al gobierno del Reino Unido a expulsar a solicitantes de asilo hacia Ruanda, país con el que se llegó a un acuerdo para que este acepte a todo aquel refugiado/a al que no se le concedió protección alguna en territorio británico. Después de un ir y venir el proyecto de ley de la Cámara de los Lores a la Cámara de los Comunes, la primera optó por no presentar más enmiendas y garantizar así que la ley fuera aprobada y quedara solo para la sanción del Rey Carlos III, jefe del Estado

La Ley en mención, que es una auténtica violación a los derechos humanos y en particular un atentado contra el derecho de asilo y refugio, beneficia al Reino Unido- y quizás también al gobierno autoritario del pequeño país de África Central manejado hace décadas por Paul Kagame-. El reparto de beneficios sería el siguiente: al gobierno británico le resultará favorable porque se quitará de encima a una población que considera indeseable y supernumeraria, al tiempo que esta medida calmará a una parte de su ciudadanía que envuelta en la xenofobia y en un racismo en ascenso exige mano dura y expulsión de migrantes y solicitantes de asilo. A Kagame, por supuesto, esta ley le servirá para que el gobierno de Sunak promueva su imagen de falso demócrata e impulse al mismo tiempo una amplia campaña de defensa de su corrupto y violento régimen, al que no dudará en señalar que es responsable de que hoy Ruanda sea un país tercero seguro. Es imposible que Ruanda con Kagame sea un país seguro cuando de él se sabe que ha sido un señor de la guerra que no ha dudado en organizar ejércitos legales e ilegales para promover el saqueo de los recursos energético de la vertiente oriental de la República Democrática del Congo, donde es responsable de una sistemática violación a los derechos humanos. En Kivu norte y Kivu sur saben del brazo siniestro del presidente Kagame.

Con total arrogancia y sin el más mínimo escrúpulo por el respeto a la juridicidad internacional -representada en la Convención de Ginebra de 1951 y el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, normas que promueven la defensa del derecho de asilo y

refugio-, ha dicho Sunak *que pase lo que pase* expulsará a todo aquel solicitante de asilo al que se le haya denegado su solicitud de asilo y refugio. Y concluyó que la lucha contra la inmigración ilegal será una de sus prioridades de cara a las próximas elecciones legislativas. De conformidad con esto, no dudó en anunciar que con la ley ya aprobada los primeros vuelos a Ruanda se empezarán a producir en escasos dos meses y medios y los primeros candidatos/ serán unas 300 personas de distintas nacionalidades. Se estima por parte de la Oficina de Auditoría de Cuentas del Reino Unido que esta masiva y oprobiosa violación de los derechos humanos costará la friolera de 665 millones de dólares. Nos imaginamos que esta astronómica cantidad incluye la coima al régimen de Kigali, pues de otro modo no se entiende que haya decidido de manera tan especial y dócil hacer parte de esta infamia contra el derecho de asilo y refugio.

En línea con lo anterior, Sunak ha dicho con total desprecio por los derechos humanos que las entidades encargadas de tramitar y decidir las solicitudes de derecho de asilo están facultadas por la ley para desconocer las normas internacionales y británicas que amparan y protegen el derecho de asilo y refugio, incluso las decisiones del Tribunal Superior de Justicia, órgano que no ha dudado en catalogar dicha ley como ilegal. El cinismo del gobierno británico ha llegado al límite de llamar a esta violatoria norma a los derechos humanos como “*Ley de Seguridad de Ruanda*” cuando lo que hace es proteger a Inglaterra y convertir a ese país del África de la zonas de los Grandes Lagos en un Estado canalla, cómplice y neocolonia de la barbarie civilizada que exhibe de nuevo el Reino Unido.

Llevar a kurdos, iraquíes, afganos y solicitantes de asilo de otras nacionalidades por la fuerza a territorio ruandés, como si esto fuera una nueva trata, no deja de ser una acción de consumada externalización del derecho de asilo en la que incurre el gobierno británico. Es claro que la civilizada Inglaterra nos muestra una vez más el rostro de su barbarie y su discurso hipócrita de la defensa del ethos democrático y de los derechos humanos. Convertir a Ruanda en el lugar del mundo de los fallidos refugiados y, por tanto, de los refugiados de facto, muestra que el gobierno de Sunak ha preferido un inhumano, costoso y perverso sistema de gestión de la migración, que comprometerse con un modelo respetuoso de los derechos humanos y de las normas internacionales asociados a la defensa y protección del

derecho de asilo y refugio

La ley aprobada por el parlamento británico crea una división criminal del trabajo porque convertirá a las aerolíneas en cómplices de la violación a los derechos humanos. Me imagino que la policía británica y el ministerio del Interior o a quien le corresponda, apelará a las sedaciones de los expulsados para poder meterlos de modo dócil en los aviones, como lo hacía el detestable presidente Mariano Rajoy del Partido Popular en su día. Rajoy, recuerdo, lo hacía con procedimientos de dudosa factura legal, Sanak lo hará con una ley que le acaba de aprobar el parlamento británico.

La mencionada ley ha sido cuestionada por Volker Türk, Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas y Filippo Grandi, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Uno y otro en lenguaje diplomático le han manifestado al gobierno del Reino Unido que es necesario adoptar medidas y acciones comprometidas que actúen sobre los flujos irregulares de refugiados y migrantes pero que ellas deben estar amparadas en el respeto al ordenamiento internacional y a los derechos humanos de estas poblaciones. Asimismo, el Consejo de Europa ha llamado la atención al primer ministro Sunak para que reconsidere la medida. Según estos y otros organismos defensores de los derechos humanos, el Reino Unido incurre en una grave violación de estos al poner en marcha esta ley. Así, el gobierno británico viola los códigos universales de los derechos humanos, esos que él pide a otros Estado cumplir en aras de la *civilización y el progreso*.

Al primer ministro Sunak le recuerdo que cientos de iraquíes están llegando al Reino Unido y vienen huyendo de la violencia generalizada que se vive en Irak producto de la guerra que Blair en nombre del Estado británico aprobó contra Sadam Husein bajo el supuesto de que este tenía en su poder armas de destrucción masiva. Por cierto, esas armas nunca aparecieron, los que si siguen apareciendo son los solicitantes de asilo y refugio iraquíes en suelo británico, esos/as mismos/as a lo que ahora el gobierno del Reino Unido deportará a Ruanda, donde reside Paul Kagame, un brutal señor de la Guerra. Sería bueno que si el gobierno del Reino Unido organizó el desorden y la muerte a gran escala en Irak, que al menos actúe por el principio de la corresponsabilidad. Ya vemos que no lo ha hecho y no lo

hará. Así es el primer “mundo civilizado”: organiza la barbarie, el hambre y después le cierra las puertas en su cara a quienes huyen del desastre que ocasionan. Tomamos atenta nota.

Hugo Paternina Spinoza

Foto tomada de: 360 Radio